

PLAZA PUBLICA

■ José de Jesús Posadas

■ Detestable desafío

Miguel Angel Granados Chapa

Hace un mes ocurrieron las últimas apariciones públicas relevantes del cardenal arzobispo de Guadalajara. Del 19 al 23 de abril participó, en Lago de Guadalupe, Estado de México, en la 54 asamblea del Episcopado Mexicano, de cuya Conferencia monseñor José de Jesús Posadas Ocampo era vicepresidente. Interrumpió su participación en ese evento para acudir, el 22 de abril, a la recordación de los estallidos de combustible en el drenaje, ocurrida un año atrás. Y volvió a la capital federal a la clausura de la asamblea. A su término, encabezó a los obispos de 24 diócesis que recibieron de la propia mano del secretario de Gobernación los certificados de su registro como asociaciones religiosas. El arzobispo de Guadalajara pidió hablar fuera de programa, y agradeció la realización de ese "acto histórico", posible "gracias al empeño" del presidente de la República. Sentenció asimismo que "la situación irregular que vivíamos creaba confusión, malos entendidos, prejuicios, simulaciones".

La víspera, a la cabeza de una procesión que llevaba en andas la imagen de la Virgen de Zapopan, el cardenal Posadas recorrió el barrio de Analco, donde se produjo la peor parte de la tragedia del 22 de abril de 1992. Luego, con sus dos obispos auxiliares y 18 sacerdotes, celebró una misa en el atrio del templo de San Sebastián, ante unas cinco mil personas. Su homilía fue característica del estilo conciliador, centrista, que fue también el de su vida pastoral. Si bien dijo que la población pudo advertir cuán graves pueden ser las consecuencias de una cadena de irresponsabilidades aparentemente sin importancia" y propuso la necesidad de satisfacer "todos los legítimos reclamos como requisito para conseguir la paz en la comunidad", expresó también que "no sería justo propiciar -entre damnificados y afectados- divisiones ni confusión con el fin de conseguir ventajas económicas y partidistas". En ese mismo tono concordista, pidió, "a los que están oficialmente responsabilizados de dar solución a las consecuencias del desastre", a los que hizo un "reconocimiento sincero por los esfuerzos realizados", que "sin abatirse por el cansancio y las incomprensiones, mantengan en alto el ánimo y luchen por conseguir los recursos económicos indispensables para una justa indemnización a quienes todavía no la reciben, que faciliten los trámites con espíritu de comprensión, juntando prudencia y sencillez, que agilicen los caminos burocráticos y que se eviten sufrimientos inútiles".

Este hombre de Iglesia, nacido en Salvatierra, Guanajuato, se había ordenado sacerdote en 1950. Veinte años después, luego de haber sido profesor y vicerrector del seminario de Morelia, alcanzó el obispado. Se le destinó a Tijuana, no hacía mucho tiempo erigida en diócesis, al punto de que él fue el segundo obispo. Permaneció allí trece años, en que concentró su esfuerzo en la construcción del seminario diocesano. Uno agudo y pro-

fesional observador de la vida pública en aquella población fronteriza, consultado anoche ex profeso, halló grandes dificultades para recordar hechos sobresalientes en la estancia de monseñor Posadas en Tijuana, salvo la sorpresa que causó entre su feligresía enterada de los pormenores de la política eclesiástica, el que se le enviara a Cuernavaca, donde sustituyó a un gigante del Episcopado, don Sergio Méndez Arceo. Breve fue su estancia en la capital de Morelos, de la que salió, elevado al gobierno de una arquidiócesis, y la segunda en importancia en todo el país, en 1987. Las crónicas de su presencia en Cuernavaca lo muestran dedicado a desalentar las iniciativas evangélicas propulsadas por Méndez Arceo, pues monseñor Posadas tenía una formación tradicional y prefería que la religión no quedara involucrada en manifestaciones políticas o en búsquedas no autorizadas por la autoridad eclesiástica.

Su ortodoxia, y su cercanía con el entonces delegado apostólico Gerónimo Prigione, a quien estuvo a recibir en el aeropuerto tapatío, en los últimos momentos de su existencia, le aseguraron en 1991 el capelo cardenalicio, que sus antecesores habían obtenido también como señal de la importancia de la vida católica en Jalisco.

Si se tratara de un atentado en contra suya, no habría sido su persona lo que promovió la trágica fiesta de las balas en que perdió la vida. No habría sido él mismo, sino lo que representaba en la estructura eclesiástica y en aquel estado, lo que habrían escogido sus asesinos como elementos para configurar un detestable desafío. La hipótesis de que el cardenal quedó entre el fuego cruzado de policías y mafiosos, si bien revelaría de modo contundente la gravedad de la violencia asociada al narcotráfico, mostraría un incremento de nivel en actos de una especie conocida. En cambio, si el homicidio del arzobispo hubiera constituido un fin en sí mismo, sería una declaración de guerra, una indicación de que un poder con capacidad de organización, con armas y audacias que sólo confiere la conciencia de la impunidad, ha resuelto combatir al Estado y a la sociedad cara a cara, hasta sus últimas consecuencias.

Es temprano para conocer los pormenores del terrible y conmovedor acontecimiento, todavía no acotado por información oficial de fondo, que permita formular conclusiones. La índole del acontecimiento recuerda operativos recientes, en el propio Jalisco o en Guerrero y Quintana Roo o Nuevo Laredo, Tijuana y Ciudad Juárez, en que el despliegue de fuerzas del narcotráfico manifiesta la existencia de verdaderos ejércitos privados que no pueden ser reducidos por la notoriamente menos vigorosa fuerza de la legalidad.

El responso debido a los restos de quienes murieron en este negro acontecimiento no debe alcanzar también a la esperanza de que la sociedad mexicana transite pronto hacia horas menos aciagas.